

LA CUESTION GRANDE.

IX.

A la buena amistad de un amigo desconocido, pero sincero amante de la patria, debemos cuantos datos se presentan en este artículo, que creemos merecer la atención, tanto del Ilmo. Sr. Intendente de Hacienda, como de cuantos se interesen por los progresos impremeditados, no se haya aún más precaria la situación económica de la Isla de Cuba. Hemos seguido desde un principio paso a paso esta cuestión, haciéndonos cargo de los absurdos sentados en ella por el pedante de la prensa periódica de la Habana; y ahora que algunas de las singulares ideas que pretendían desarrollar aquel periódico, parecen que tratan de ponerse en ejecución, aunque con algún mejor criterio que el demostrado por aquel celebrísimo articulista, hemos de examinarlos con algún detenimiento en los decretos expedidos por el Excmo. Sr. Gobernador Superior Político, publicados en la Gaceta de 27 de agosto último; y como final, también diremos algo de pasada, respecto al pago del 50 p. en oro de los derechos de importación de los artículos de lujo, y de la venta de los bienes incautados.

Ante todo, y como un deber de justicia, aplaudimos sin reservas de ningún género, el buen deseo que revela las disposiciones de que vamos a ocuparnos; y aplaudimos con toda efusión las disposiciones acordadas, si a nuestro pobre entender, concuerdan efectivamente al logro de lo que se proponen, esto es, a mejorar la situación económica de la plaza. Pero como desgraciadamente en todas las disposiciones acordadas creemos ver errores de suma trascendencia, no sólo en los fundamentos en que las disposiciones se apoyan, sino en las mismas disposiciones decretadas; y que de llevarse adelante lo dispuesto, sin las enmiendas correspondientes, pudieran crearse compromisos de difícil, si no imposible, cumplimiento por la Hacienda; en nuestro sincero deseo, de que se proceda con toda seguridad en la solución de una crisis, que no es hija sino de circunstancias extraordinarias que en cuanto desaparezcan cesará también la crisis, nos vemos precisados a hacer algunas observaciones que, de tomarse en cuenta, nos parece que conducirán a mejor resultado que el que se ha obtenido en los decretos, si se llevan adelante sin la correspondiente reforma.

Respecto al decreto de 27 de agosto, no diremos nada de los dos primeros considerando, porque tampoco ellos en realidad dicen cosa alguna que merezca que nos detengamos en ellos; pero en cuanto al tercero, hemos de hacer notar la falta de estudio con que ha sido redactado; pues al suponer que la crisis es simplemente monetaria, se dice en el mismo considerando que en unas partes no circula sino la moneda, y en otras el billete. Antes de anteponer semejantes considerando al Decreto, debiera haberse tenido presente que se entiende por crisis monetaria, pues lo único que aquí hay es de depreciación de la moneda ó de su signo circulante, lo cual dista mucho de asemejarse á lo que científicamente se llama crisis monetaria. Antes de estar semejante considerando, que puede redundar en desprecio de la Hacienda, debiera haberse tenido presente que el billete de Banco emitido por el Tesoro, abunda y hasta con exceso en la circulación, siendo más que suficiente para llenar las necesidades de la plaza, puesto que habiéndose acordado por todas las clases en admisión como moneda, acuerdo aprobado por el Gobierno Supremo, es el billete verdadera moneda corriente, y habiéndolo en exceso, es hasta opuesto á lo que todos vemos y tocamos, al decir que la actual crisis es monetaria.

Además, no puede decirse que existe crisis monetaria, mientras circulan signos legales y admitidos de valor; y el error de la Hacienda es tanto más notable, cuanto que parece desconocer por la Intendencia que los referidos billetes han circulado y circulan como moneda, desde que el Tesoro ha cubierto con ellos todas sus obligaciones; con lo cual este mismo Tesoro se ha imposibilitado moralmente de despojarse del carácter de moneda, mientras no proceda el reembolso de las emisiones de dicho papel hechas por cuenta del Gobierno. Así es que la Hacienda, no precediendo aquel reembolso, no podrá jamás negarse á recibir los billetes del Banco por todo su valor nominal, que para ella siempre, y no mediando el reembolso, será efectivo. Se pena de cometer el mayor abuso de fuerza que en buena moral es posible concebir.

En el mismo considerando declara que el oro es la unidad monetaria. No comprendemos semejante declaración en una oficina superior de Hacienda. ¿Dónde de ha sacado semejante principio? El Real Decreto de 15 de abril de 1848, se señaló como unidad monetaria en todos los dominios españoles, el real de vellón. En el año 1866 se señaló como tal el escudo; y aquí, y como opinión nuestra, diremos que es la disposición más racional, pues comprendida fácilmente todas las monedas anteriores. Y en 1869, por el Ministro D. Laureano Figuerola, desemos de unificar nuestra moneda

con la más corriente en el Mediodía de Europa, se dispuso que la unidad fuera la peseta, cuyo decreto se publicó en esta Isla el 22 de agosto de 1870, empezando á regir desde 1.º de julio de 1871, y llevándose desde entonces por las oficinas de Hacienda, sin que estemos equivocados, la contabilidad oficial por pesetas. En virtud de ello, y mientras otra cosa no se disponga por el Gobierno Supremo, creemos que ni la Intendencia ni nadie puede variar la unidad monetaria establecida. Además, al tal considerando es más ocasionado á errores de lo que al primer golpe de vista aparece. Al sentar una unidad metálica, expusimos como hemos visto, concedió la Hacienda á los demás la facultad de recibir ó de rechazar los billetes, aunque se los dé el Gobierno, estableciendo en lo sucesivo para sus pagos el comercio y los particulares la especie oro, ó lo equivalente en billetes del Banco; con lo cual, de llevarse adelante sin reforma alguna, en este considerando del decreto se correría el inminente peligro de que la Hacienda pública sufriera inmensos perjuicios.

Más dejando ya los considerandos del referido decreto, que en su mayor parte darían lugar á largos comentarios por lo impredicables que han sido escritos, pasemos á ocuparnos del artículo 1.º, en el cual dichos comentarios se encuentran traducidos por disposiciones.

El artículo 1.º dice, que se autoriza en esta Isla la circulación del oro de todas las Repúblicas de América, por su valor intrínseco, y que tenga la misma ley que la moneda española. La redacción deja algo que desear, pero no nos ocupamos de ella.

La moneda de oro de los países americanos, ha circulado sin interrupción en esta Isla para el comercio, hasta que ha desaparecido casi toda la nacional, sin que para dicha circulación procediera la autorización del Gobierno; y es lógico en cuanto cabe que las oficinas recaudadoras estén obligadas á recibir en pago de los billetes los derechos que hayan de satisfacerse al Tesoro. De estas premisas se deduce, sin que haya lugar á objeción alguna, que el Tesoro está obligado á recibir sus rendimientos en billetes del Banco Español; en moneda española; en moneda de los Estados Unidos; en la de Nueva Granada, que según el Diario de la Marina de 1.º de agosto de 1849, anunció su Gobierno la aceptación de una moneda de oro con una diferencia de dos y medio reales fuertes de media, relativamente al valor por unidad que hasta entonces había tenido; en moneda de Chile ajustada al sistema decimal, según el proyecto monetario de aquella República, anunciado por el mismo diario en 10 de octubre de 1850; en moneda de Costa Rica, que desde 1848 dejó la ley de sus dobles de oro de dos pesos; y en las demás monedas que existan y que puedan existir en toda América, por supuesto, por lo de su valor intrínseco, y que tenga la misma ley que la moneda española.

Dejando aparte las inmensas dificultades que van á tropezar las oficinas, sobre todo con un personal nuevo, desconocedor hasta del sistema monetario de la Isla, y por lo tanto sin la menor experiencia para recaudar los derechos de la Hacienda en tan distintas especies, y los irreparables perjuicios que por ello indudablemente sufrirá el Tesoro, vamos á ver que se entiende por valor intrínseco de las monedas en el lenguaje común convencional.

El valor intrínseco es el del metal con el que se contenga la moneda, con más el costo de la acuñación hasta porción en condiciones de circular por el mercado con el valor representativo que se le concedió legalmente. ¿Cómo, pues, podrá averiguarse este por las oficinas? ¿Acaso es tan fácil adquirir estos conocimientos, como de un mal oficial conocer un jefe de Administración, y ponerlo al frente de un departamento, aunque de él no entienda ni siquiera el mecanismo? Preciso será, pues, que, antes de darse el debido cumplimiento al decreto, la autoridad de Hacienda determine el valor por el cual se han de recibir las monedas americanas en las cajas del Tesoro; y será sumamente fácil, después de todo, que así como en la Península la moneda de cinco francos de plata era admitida por diez y nueve reales vellón, cuando en valor real era de solos diez y ocho y catorce maravedises, la moneda de oro de muchas repúblicas de América tenga que admitirse por un valor intrínseco deficiente, y que en virtud de ello con el tiempo hayamos de sufrir los perjuicios consiguientes. Además, la moneda de oro de las diferentes Repúblicas de América, tendrá ó no la misma ley que la moneda española. Si la tiene como sucede con la mejicana, no hay dificultades; pero qué sucederá con la de Colombia, 20, 10 ó 60 milésimas? ¿Cómo averiguarán estas oficinas? ¿Dónde de ha sacado semejante principio? El Real Decreto de 15 de abril de 1848, se señaló como unidad monetaria en todos los dominios españoles, el real de vellón. En el año 1866 se señaló como tal el escudo; y aquí, y como opinión nuestra, diremos que es la disposición más racional, pues comprendida fácilmente todas las monedas anteriores. Y en 1869, por el Ministro D. Laureano Figuerola, desemos de unificar nuestra moneda

con la más corriente en el Mediodía de Europa, se dispuso que la unidad fuera la peseta, cuyo decreto se publicó en esta Isla el 22 de agosto de 1870, empezando á regir desde 1.º de julio de 1871, y llevándose desde entonces por las oficinas de Hacienda, sin que estemos equivocados, la contabilidad oficial por pesetas. En virtud de ello, y mientras otra cosa no se disponga por el Gobierno Supremo, creemos que ni la Intendencia ni nadie puede variar la unidad monetaria establecida. Además, al tal considerando es más ocasionado á errores de lo que al primer golpe de vista aparece. Al sentar una unidad metálica, expusimos como hemos visto, concedió la Hacienda á los demás la facultad de recibir ó de rechazar los billetes, aunque se los dé el Gobierno, estableciendo en lo sucesivo para sus pagos el comercio y los particulares la especie oro, ó lo equivalente en billetes del Banco; con lo cual, de llevarse adelante sin reforma alguna, en este considerando del decreto se correría el inminente peligro de que la Hacienda pública sufriera inmensos perjuicios.

quiere la cuestión, y van dando por sentado que, si la moneda española actual, cuando del malestar que motiva estas providencias, pudiera venir oro de toda América, que desgraciadamente no esperamos que venga; después de lo expuesto, nos parece que el mas lego comprenderá que es irreconciliable lo que en el artículo 1.º del Decreto se dispone y que si se realizara, sería en definitiva farsa en cuanto cabe para el Tesoro.

A nuestro entender, el artículo 2.º podría muy bien suprimirse, pues no se comprende su objeto. La Instrucción de Aduanas permite, desde 1847, la introducción del oro amonedado y en pasta sin derecho alguno, sea el que quiera su origen y procedencia.

El artículo tercero ya tiene mayor importancia. En él se quiere impedir, ó, como menos dicho, la salida del oro de la Isla, reargándolo en un 5 p. sobre los derechos ya establecidos. Mas precisamente esta sola disposición anuncia las intenciones con que el decreto se ha dictado, porque en el momento en que el valor de este oro, para atender á obligaciones exteriores, se haga superior al suyo intrínseco, es claro como la luz que lo que se moneda de buena ley no vendrá bajo ningún concepto. Esta sola disposición hace el decreto inútil, y además irrealizable. Así es, que cuando no creemos que esta medida produzca resultado alguno por ahora, al menos sin las modificaciones que el simple buen sentido aconseja, si no se deroga ó por lo menos se aclara, y podría venir muy pronto el caso de que produjera complicaciones algo más graves que las que hasta ahora hemos tenido que vencer; complicaciones que la Intendencia está en el deber de prevenir. No es sino muy fácil que en vista del decreto y de sus desechos, en alguna de las Repúblicas de América, que tantas pruebas de odio nos dan, y con el exclusivo objeto de perjudicar la dominación española en las Antillas, se oculte monedas con destino á Cuba, de un valor intrínseco menor aún del que el cambio que hoy tienen los billetes de Banco, ó introduciéndola en la Isla, logre circular por las escasas que hay en la circulación actual de moneda española, con el valor de la moneda española. ¿Qué disposiciones dictará la Intendencia para evitar este probable abuso? Esperemos. En otro artículo lo continuaremos examinando las demás disposiciones de la Intendencia, desde la fecha de aquel decreto hasta hoy, pues la materia se presta para escribir mucho, y un artículo no puede pasar de ciertos límites.—T.

Y sigue.

La Legalidad, insistiendo en que hemos dado una etimología ó derivación de la palabra *Legalidad*, que la cuestión de que lo es Sr. Poyatos, cuando solo he mos hablado de la composición de dicha palabra, manifestada desde las respetables autoridades, que citamos, y en las cuales colocamos en la Antilla, y quien en todo América, por supuesto, por lo de su valor intrínseco, y que tenga la misma ley que la moneda española.

Dejando aparte las inmensas dificultades que van á tropezar las oficinas, sobre todo con un personal nuevo, desconocedor hasta del sistema monetario de la Isla, y por lo tanto sin la menor experiencia para recaudar los derechos de la Hacienda en tan distintas especies, y los irreparables perjuicios que por ello indudablemente sufrirá el Tesoro, vamos á ver que se entiende por valor intrínseco de las monedas en el lenguaje común convencional.

El valor intrínseco es el del metal con el que se contenga la moneda, con más el costo de la acuñación hasta porción en condiciones de circular por el mercado con el valor representativo que se le concedió legalmente. ¿Cómo, pues, podrá averiguarse este por las oficinas? ¿Acaso es tan fácil adquirir estos conocimientos, como de un mal oficial conocer un jefe de Administración, y ponerlo al frente de un departamento, aunque de él no entienda ni siquiera el mecanismo? Preciso será, pues, que, antes de darse el debido cumplimiento al decreto, la autoridad de Hacienda determine el valor por el cual se han de recibir las monedas americanas en las cajas del Tesoro; y será sumamente fácil, después de todo, que así como en la Península la moneda de cinco francos de plata era admitida por diez y nueve reales vellón, cuando en valor real era de solos diez y ocho y catorce maravedises, la moneda de oro de muchas repúblicas de América tenga que admitirse por un valor intrínseco deficiente, y que en virtud de ello con el tiempo hayamos de sufrir los perjuicios consiguientes. Además, la moneda de oro de las diferentes Repúblicas de América, tendrá ó no la misma ley que la moneda española. Si la tiene como sucede con la mejicana, no hay dificultades; pero qué sucederá con la de Colombia, 20, 10 ó 60 milésimas? ¿Cómo averiguarán estas oficinas? ¿Dónde de ha sacado semejante principio? El Real Decreto de 15 de abril de 1848, se señaló como unidad monetaria en todos los dominios españoles, el real de vellón. En el año 1866 se señaló como tal el escudo; y aquí, y como opinión nuestra, diremos que es la disposición más racional, pues comprendida fácilmente todas las monedas anteriores. Y en 1869, por el Ministro D. Laureano Figuerola, desemos de unificar nuestra moneda

con la más corriente en el Mediodía de Europa, se dispuso que la unidad fuera la peseta, cuyo decreto se publicó en esta Isla el 22 de agosto de 1870, empezando á regir desde 1.º de julio de 1871, y llevándose desde entonces por las oficinas de Hacienda, sin que estemos equivocados, la contabilidad oficial por pesetas. En virtud de ello, y mientras otra cosa no se disponga por el Gobierno Supremo, creemos que ni la Intendencia ni nadie puede variar la unidad monetaria establecida. Además, al tal considerando es más ocasionado á errores de lo que al primer golpe de vista aparece. Al sentar una unidad metálica, expusimos como hemos visto, concedió la Hacienda á los demás la facultad de recibir ó de rechazar los billetes, aunque se los dé el Gobierno, estableciendo en lo sucesivo para sus pagos el comercio y los particulares la especie oro, ó lo equivalente en billetes del Banco; con lo cual, de llevarse adelante sin reforma alguna, en este considerando del decreto se correría el inminente peligro de que la Hacienda pública sufriera inmensos perjuicios.

quiere la cuestión, y van dando por sentado que, si la moneda española actual, cuando del malestar que motiva estas providencias, pudiera venir oro de toda América, que desgraciadamente no esperamos que venga; después de lo expuesto, nos parece que el mas lego comprenderá que es irreconciliable lo que en el artículo 1.º del Decreto se dispone y que si se realizara, sería en definitiva farsa en cuanto cabe para el Tesoro.

A nuestro entender, el artículo 2.º podría muy bien suprimirse, pues no se comprende su objeto. La Instrucción de Aduanas permite, desde 1847, la introducción del oro amonedado y en pasta sin derecho alguno, sea el que quiera su origen y procedencia.

El artículo tercero ya tiene mayor importancia. En él se quiere impedir, ó, como menos dicho, la salida del oro de la Isla, reargándolo en un 5 p. sobre los derechos ya establecidos. Mas precisamente esta sola disposición anuncia las intenciones con que el decreto se ha dictado, porque en el momento en que el valor de este oro, para atender á obligaciones exteriores, se haga superior al suyo intrínseco, es claro como la luz que lo que se moneda de buena ley no vendrá bajo ningún concepto. Esta sola disposición hace el decreto inútil, y además irrealizable. Así es, que cuando no creemos que esta medida produzca resultado alguno por ahora, al menos sin las modificaciones que el simple buen sentido aconseja, si no se deroga ó por lo menos se aclara, y podría venir muy pronto el caso de que produjera complicaciones algo más graves que las que hasta ahora hemos tenido que vencer; complicaciones que la Intendencia está en el deber de prevenir. No es sino muy fácil que en vista del decreto y de sus desechos, en alguna de las Repúblicas de América, que tantas pruebas de odio nos dan, y con el exclusivo objeto de perjudicar la dominación española en las Antillas, se oculte monedas con destino á Cuba, de un valor intrínseco menor aún del que el cambio que hoy tienen los billetes de Banco, ó introduciéndola en la Isla, logre circular por las escasas que hay en la circulación actual de moneda española, con el valor de la moneda española. ¿Qué disposiciones dictará la Intendencia para evitar este probable abuso? Esperemos. En otro artículo lo continuaremos examinando las demás disposiciones de la Intendencia, desde la fecha de aquel decreto hasta hoy, pues la materia se presta para escribir mucho, y un artículo no puede pasar de ciertos límites.—T.

Y sigue.

La Legalidad, insistiendo en que hemos dado una etimología ó derivación de la palabra *Legalidad*, que la cuestión de que lo es Sr. Poyatos, cuando solo he mos hablado de la composición de dicha palabra, manifestada desde las respetables autoridades, que citamos, y en las cuales colocamos en la Antilla, y quien en todo América, por supuesto, por lo de su valor intrínseco, y que tenga la misma ley que la moneda española.

Dejando aparte las inmensas dificultades que van á tropezar las oficinas, sobre todo con un personal nuevo, desconocedor hasta del sistema monetario de la Isla, y por lo tanto sin la menor experiencia para recaudar los derechos de la Hacienda en tan distintas especies, y los irreparables perjuicios que por ello indudablemente sufrirá el Tesoro, vamos á ver que se entiende por valor intrínseco de las monedas en el lenguaje común convencional.

El valor intrínseco es el del metal con el que se contenga la moneda, con más el costo de la acuñación hasta porción en condiciones de circular por el mercado con el valor representativo que se le concedió legalmente. ¿Cómo, pues, podrá averiguarse este por las oficinas? ¿Acaso es tan fácil adquirir estos conocimientos, como de un mal oficial conocer un jefe de Administración, y ponerlo al frente de un departamento, aunque de él no entienda ni siquiera el mecanismo? Preciso será, pues, que, antes de darse el debido cumplimiento al decreto, la autoridad de Hacienda determine el valor por el cual se han de recibir las monedas americanas en las cajas del Tesoro; y será sumamente fácil, después de todo, que así como en la Península la moneda de cinco francos de plata era admitida por diez y nueve reales vellón, cuando en valor real era de solos diez y ocho y catorce maravedises, la moneda de oro de muchas repúblicas de América tenga que admitirse por un valor intrínseco deficiente, y que en virtud de ello con el tiempo hayamos de sufrir los perjuicios consiguientes. Además, la moneda de oro de las diferentes Repúblicas de América, tendrá ó no la misma ley que la moneda española. Si la tiene como sucede con la mejicana, no hay dificultades; pero qué sucederá con la de Colombia, 20, 10 ó 60 milésimas? ¿Cómo averiguarán estas oficinas? ¿Dónde de ha sacado semejante principio? El Real Decreto de 15 de abril de 1848, se señaló como unidad monetaria en todos los dominios españoles, el real de vellón. En el año 1866 se señaló como tal el escudo; y aquí, y como opinión nuestra, diremos que es la disposición más racional, pues comprendida fácilmente todas las monedas anteriores. Y en 1869, por el Ministro D. Laureano Figuerola, desemos de unificar nuestra moneda

con la más corriente en el Mediodía de Europa, se dispuso que la unidad fuera la peseta, cuyo decreto se publicó en esta Isla el 22 de agosto de 1870, empezando á regir desde 1.º de julio de 1871, y llevándose desde entonces por las oficinas de Hacienda, sin que estemos equivocados, la contabilidad oficial por pesetas. En virtud de ello, y mientras otra cosa no se disponga por el Gobierno Supremo, creemos que ni la Intendencia ni nadie puede variar la unidad monetaria establecida. Además, al tal considerando es más ocasionado á errores de lo que al primer golpe de vista aparece. Al sentar una unidad metálica, expusimos como hemos visto, concedió la Hacienda á los demás la facultad de recibir ó de rechazar los billetes, aunque se los dé el Gobierno, estableciendo en lo sucesivo para sus pagos el comercio y los particulares la especie oro, ó lo equivalente en billetes del Banco; con lo cual, de llevarse adelante sin reforma alguna, en este considerando del decreto se correría el inminente peligro de que la Hacienda pública sufriera inmensos perjuicios.

quiere la cuestión, y van dando por sentado que, si la moneda española actual, cuando del malestar que motiva estas providencias, pudiera venir oro de toda América, que desgraciadamente no esperamos que venga; después de lo expuesto, nos parece que el mas lego comprenderá que es irreconciliable lo que en el artículo 1.º del Decreto se dispone y que si se realizara, sería en definitiva farsa en cuanto cabe para el Tesoro.

A nuestro entender, el artículo 2.º podría muy bien suprimirse, pues no se comprende su objeto. La Instrucción de Aduanas permite, desde 1847, la introducción del oro amonedado y en pasta sin derecho alguno, sea el que quiera su origen y procedencia.

El artículo tercero ya tiene mayor importancia. En él se quiere impedir, ó, como menos dicho, la salida del oro de la Isla, reargándolo en un 5 p. sobre los derechos ya establecidos. Mas precisamente esta sola disposición anuncia las intenciones con que el decreto se ha dictado, porque en el momento en que el valor de este oro, para atender á obligaciones exteriores, se haga superior al suyo intrínseco, es claro como la luz que lo que se moneda de buena ley no vendrá bajo ningún concepto. Esta sola disposición hace el decreto inútil, y además irrealizable. Así es, que cuando no creemos que esta medida produzca resultado alguno por ahora, al menos sin las modificaciones que el simple buen sentido aconseja, si no se deroga ó por lo menos se aclara, y podría venir muy pronto el caso de que produjera complicaciones algo más graves que las que hasta ahora hemos tenido que vencer; complicaciones que la Intendencia está en el deber de prevenir. No es sino muy fácil que en vista del decreto y de sus desechos, en alguna de las Repúblicas de América, que tantas pruebas de odio nos dan, y con el exclusivo objeto de perjudicar la dominación española en las Antillas, se oculte monedas con destino á Cuba, de un valor intrínseco menor aún del que el cambio que hoy tienen los billetes de Banco, ó introduciéndola en la Isla, logre circular por las escasas que hay en la circulación actual de moneda española, con el valor de la moneda española. ¿Qué disposiciones dictará la Intendencia para evitar este probable abuso? Esperemos. En otro artículo lo continuaremos examinando las demás disposiciones de la Intendencia, desde la fecha de aquel decreto hasta hoy, pues la materia se presta para escribir mucho, y un artículo no puede pasar de ciertos límites.—T.

Y sigue.

La Legalidad, insistiendo en que hemos dado una etimología ó derivación de la palabra *Legalidad*, que la cuestión de que lo es Sr. Poyatos, cuando solo he mos hablado de la composición de dicha palabra, manifestada desde las respetables autoridades, que citamos, y en las cuales colocamos en la Antilla, y quien en todo América, por supuesto, por lo de su valor intrínseco, y que tenga la misma ley que la moneda española.

Dejando aparte las inmensas dificultades que van á tropezar las oficinas, sobre todo con un personal nuevo, desconocedor hasta del sistema monetario de la Isla, y por lo tanto sin la menor experiencia para recaudar los derechos de la Hacienda en tan distintas especies, y los irreparables perjuicios que por ello indudablemente sufrirá el Tesoro, vamos á ver que se entiende por valor intrínseco de las monedas en el lenguaje común convencional.

El valor intrínseco es el del metal con el que se contenga la moneda, con más el costo de la acuñación hasta porción en condiciones de circular por el mercado con el valor representativo que se le concedió legalmente. ¿Cómo, pues, podrá averiguarse este por las oficinas? ¿Acaso es tan fácil adquirir estos conocimientos, como de un mal oficial conocer un jefe de Administración, y ponerlo al frente de un departamento, aunque de él no entienda ni siquiera el mecanismo? Preciso será, pues, que, antes de darse el debido cumplimiento al decreto, la autoridad de Hacienda determine el valor por el cual se han de recibir las monedas americanas en las cajas del Tesoro; y será sumamente fácil, después de todo, que así como en la Península la moneda de cinco francos de plata era admitida por diez y nueve reales vellón, cuando en valor real era de solos diez y ocho y catorce maravedises, la moneda de oro de muchas repúblicas de América tenga que admitirse por un valor intrínseco deficiente, y que en virtud de ello con el tiempo hayamos de sufrir los perjuicios consiguientes. Además, la moneda de oro de las diferentes Repúblicas de América, tendrá ó no la misma ley que la moneda española. Si la tiene como sucede con la mejicana, no hay dificultades; pero qué sucederá con la de Colombia, 20, 10 ó 60 milésimas? ¿Cómo averiguarán estas oficinas? ¿Dónde de ha sacado semejante principio? El Real Decreto de 15 de abril de 1848, se señaló como unidad monetaria en todos los dominios españoles, el real de vellón. En el año 1866 se señaló como tal el escudo; y aquí, y como opinión nuestra, diremos que es la disposición más racional, pues comprendida fácilmente todas las monedas anteriores. Y en 1869, por el Ministro D. Laureano Figuerola, desemos de unificar nuestra moneda

con la más corriente en el Mediodía de Europa, se dispuso que la unidad fuera la peseta, cuyo decreto se publicó en esta Isla el 22 de agosto de 1870, empezando á regir desde 1.º de julio de 1871, y llevándose desde entonces por las oficinas de Hacienda, sin que estemos equivocados, la contabilidad oficial por pesetas. En virtud de ello, y mientras otra cosa no se disponga por el Gobierno Supremo, creemos que ni la Intendencia ni nadie puede variar la unidad monetaria establecida. Además, al tal considerando es más ocasionado á errores de lo que al primer golpe de vista aparece. Al sentar una unidad metálica, expusimos como hemos visto, concedió la Hacienda á los demás la facultad de recibir ó de rechazar los billetes, aunque se los dé el Gobierno, estableciendo en lo sucesivo para sus pagos el comercio y los particulares la especie oro, ó lo equivalente en billetes del Banco; con lo cual, de llevarse adelante sin reforma alguna, en este considerando del decreto se correría el inminente peligro de que la Hacienda pública sufriera inmensos perjuicios.

quiere la cuestión, y van dando por sentado que, si la moneda española actual, cuando del malestar que motiva estas providencias, pudiera venir oro de toda América, que desgraciadamente no esperamos que venga; después de lo expuesto, nos parece que el mas lego comprenderá que es irreconciliable lo que en el artículo 1.º del Decreto se dispone y que si se realizara, sería en definitiva farsa en cuanto cabe para el Tesoro.

A nuestro entender, el artículo 2.º podría muy bien suprimirse, pues no se comprende su objeto. La Instrucción de Aduanas permite, desde 1847, la introducción del oro amonedado y en pasta sin derecho alguno, sea el que quiera su origen y procedencia.

El artículo tercero ya tiene mayor importancia. En él se quiere impedir, ó, como menos dicho, la salida del oro de la Isla, reargándolo en un 5 p. sobre los derechos ya establecidos. Mas precisamente esta sola disposición anuncia las intenciones con que el decreto se ha dictado, porque en el momento en que el valor de este oro, para atender á obligaciones exteriores, se haga superior al suyo intrínseco, es claro como la luz que lo que se moneda de buena ley no vendrá bajo ningún concepto. Esta sola disposición hace el decreto inútil, y además irrealizable. Así es, que cuando no creemos que esta medida produzca resultado alguno por ahora, al menos sin las modificaciones que el simple buen sentido aconseja, si no se deroga ó por lo menos se aclara, y podría venir muy pronto el caso de que produjera complicaciones algo más graves que las que hasta ahora hemos tenido que vencer; complicaciones que la Intendencia está en el deber de prevenir. No es sino muy fácil que en vista del decreto y de sus desechos, en alguna de las Repúblicas de América, que tantas pruebas de odio nos dan, y con el exclusivo objeto de perjudicar la dominación española en las Antillas, se oculte monedas con destino á Cuba, de un valor intrínseco menor aún del que el cambio que hoy tienen los billetes de Banco, ó introduciéndola en la Isla, logre circular por las escasas que hay en la circulación actual de moneda española, con el valor de la moneda española. ¿Qué disposiciones dictará la Intendencia para evitar este probable abuso? Esperemos. En otro artículo lo continuaremos examinando las demás disposiciones de la Intendencia, desde la fecha de aquel decreto hasta hoy, pues la materia se presta para escribir mucho, y un artículo no puede pasar de ciertos límites.—T.

Y sigue.

La Legalidad, insistiendo en que hemos dado una etimología ó derivación de la palabra *Legalidad*, que la cuestión de que lo es Sr. Poyatos, cuando solo he mos hablado de la composición de dicha palabra, manifestada desde las respetables autoridades, que citamos, y en las cuales colocamos en la Antilla, y quien en todo América, por supuesto, por lo de su valor intrínseco, y que tenga la misma ley que la moneda española.

Dejando aparte las inmensas dificultades que van á tropezar las oficinas, sobre todo con un personal nuevo, desconocedor hasta del sistema monetario de la Isla, y por lo tanto sin la menor experiencia para recaudar los derechos de la Hacienda en tan distintas especies, y los irreparables perjuicios que por ello indudablemente sufrirá el Tesoro, vamos á ver que se entiende por valor intrínseco de las monedas en el lenguaje común convencional.

El valor intrínseco es el del metal con el que se contenga la moneda, con más el costo de la acuñación hasta porción en condiciones de circular por el mercado con el valor representativo que se le concedió legalmente. ¿Cómo, pues, podrá averiguarse este por las oficinas? ¿Acaso es tan fácil adquirir estos conocimientos, como de un mal oficial conocer un jefe de Administración, y ponerlo al frente de un departamento, aunque de él no entienda ni siquiera el mecanismo? Preciso será, pues, que, antes de darse el debido cumplimiento al decreto, la autoridad de Hacienda determine el valor por el cual se han de recibir las monedas americanas en las cajas del Tesoro; y será sumamente fácil, después de todo, que así como en la Península la moneda de cinco francos de plata era admitida por diez y nueve reales vellón, cuando en valor real era de solos diez y ocho y catorce maravedises, la moneda de oro de muchas repúblicas de América tenga que admitirse por un valor intrínseco deficiente, y que en virtud de ello con el tiempo hayamos de sufrir los perjuicios consiguientes. Además, la moneda de oro de las diferentes Repúblicas de América, tendrá ó no la misma ley que la moneda española. Si la tiene como sucede con la mejicana, no hay dificultades; pero qué sucederá con la de Colombia, 20, 10 ó 60 milésimas? ¿Cómo averiguarán estas oficinas? ¿Dónde de ha sacado semejante principio? El Real Decreto de 15 de abril de 1848, se señaló como unidad monetaria en todos los dominios españoles, el real de vellón. En el año 1866 se señaló como tal el escudo; y aquí, y como opinión nuestra, diremos que es la disposición más racional, pues comprendida fácilmente todas las monedas anteriores. Y en 1869, por el Ministro D. Laureano Figuerola, desemos de unificar nuestra moneda

con la más corriente en el Mediodía de Europa, se dispuso que la unidad fuera la peseta, cuyo decreto se publicó en esta Isla el 22 de agosto de 1870, empezando á regir desde 1.º de julio de 1871, y llevándose desde entonces por las oficinas de Hacienda, sin que estemos equivocados, la contabilidad oficial por pesetas. En virtud de ello, y mientras otra cosa no se disponga por el Gobierno Supremo, creemos que ni la Intendencia ni nadie puede variar la unidad monetaria establecida. Además, al tal considerando es más ocasionado á errores de lo que al primer golpe de vista aparece. Al sentar una unidad metálica, expusimos como hemos visto, concedió la Hacienda á los demás la facultad de recibir ó de rechazar los billetes, aunque se los dé el Gobierno, estableciendo en lo sucesivo para sus pagos el comercio y los particulares la especie oro, ó lo equivalente en billetes del Banco; con lo cual, de llevarse adelante sin reforma alguna, en este considerando del decreto se correría el inminente peligro de que la Hacienda pública sufriera inmensos perjuicios.

quiere la cuestión, y van dando por sentado que, si la moneda española actual, cuando del malestar que motiva estas providencias, pudiera venir oro de toda América, que desgraciadamente no esperamos que venga; después de lo expuesto, nos parece que el mas lego comprenderá que es irreconciliable lo que en el artículo 1.º del Decreto se dispone y que si se realizara, sería en definitiva farsa en cuanto cabe para el Tesoro.

A nuestro entender, el artículo 2.º podría muy bien suprimirse, pues no se comprende su objeto. La Instrucción de Aduanas permite, desde 1847, la introducción del oro amonedado y en pasta sin derecho alguno, sea el que quiera su origen y procedencia.

El artículo tercero ya tiene mayor importancia. En él se quiere impedir, ó, como menos dicho, la salida del oro de la Isla, reargándolo en un 5 p. sobre los derechos ya establecidos. Mas precisamente esta sola disposición anuncia las intenciones con que el decreto se ha dictado, porque en el momento en que el valor de este oro, para atender á obligaciones exteriores, se haga superior al suyo intrínseco, es claro como la luz que lo que se moneda de buena ley no vendrá bajo ningún concepto. Esta sola disposición hace el decreto inútil, y además irrealizable. Así es, que cuando no creemos que esta medida produzca resultado alguno por ahora, al menos sin las modificaciones que el simple buen sentido aconseja, si no se deroga ó por lo menos se aclara, y podría venir muy pronto el caso de que produjera complicaciones algo más graves que las que hasta ahora hemos tenido que vencer; complicaciones que la Intendencia está en el deber de prevenir. No es sino muy fácil que en vista del decreto y de sus desechos, en alguna de las Repúblicas de América, que tantas pruebas de odio nos dan, y con el exclusivo objeto de perjudicar la dominación española en las Antillas, se oculte monedas con destino á Cuba, de un valor intrínseco menor aún del que el cambio que hoy tienen los billetes de Banco, ó introduciéndola en la Isla, logre circular por las escasas que hay en la circulación actual de moneda española, con el valor de la moneda española. ¿Qué disposiciones dictará la Intendencia para evitar este probable abuso? Esperemos. En otro artículo lo continuaremos examinando las demás disposiciones de la Intendencia, desde la fecha de aquel decreto hasta hoy, pues la materia se presta para escribir mucho, y un artículo no puede pasar de ciertos límites.—T.

con la más corriente en el Mediodía de Europa, se dispuso que la unidad fuera la peseta, cuyo decreto se publicó en esta Isla el 22 de agosto de 1870, empezando á regir desde 1.º de julio de 1871, y llevándose desde entonces por las oficinas de Hacienda, sin que estemos equivocados, la contabilidad oficial por pesetas. En virtud de ello, y mientras otra cosa no se disponga por el Gobierno Supremo, creemos que ni la Intendencia ni nadie puede variar la unidad monetaria establecida. Además, al tal considerando es más ocasionado á errores de lo que al primer golpe de vista aparece. Al sentar una unidad metálica, expusimos como hemos visto, concedió la Hacienda á los demás la facultad de recibir ó de rechazar los billetes, aunque se los dé el Gobierno, estableciendo en lo sucesivo para sus pagos el comercio y los particulares la especie oro, ó lo equivalente en billetes del Banco; con lo cual, de llevarse adelante sin reforma alguna, en este considerando del decreto se correría el inminente peligro de que la Hacienda pública sufriera inmensos perjuicios.

quiere la cuestión, y van dando por sentado que, si la moneda española actual, cuando del malestar que motiva estas providencias, pudiera venir oro de toda América, que desgraciadamente no esperamos que venga; después de lo expuesto, nos parece que el mas lego comprenderá que es irreconciliable lo que en el artículo 1.º del Decreto se dispone y que si se realizara, sería en definitiva farsa en cuanto cabe para el Tesoro.

A nuestro entender, el artículo 2.º podría muy bien suprimirse, pues no se comprende su objeto. La Instrucción de Aduanas permite, desde 1847, la introducción del oro amonedado y en pasta sin derecho alguno, sea el que quiera su origen y procedencia.

El artículo tercero ya tiene mayor importancia. En él se quiere impedir, ó, como menos dicho, la salida del oro de la Isla, reargándolo en un 5 p. sobre los derechos ya establecidos. Mas precisamente esta sola disposición anuncia las intenciones con que el decreto se ha dictado, porque en el momento en que el valor de este oro, para atender á obligaciones exteriores, se haga superior al suyo intrínseco, es claro como la luz que lo que se moneda de buena ley no vendrá bajo ningún concepto. Esta sola disposición hace el decreto inútil, y además irrealizable. Así es, que cuando no creemos que esta medida produzca resultado alguno por ahora, al menos sin las modificaciones que el simple buen sentido aconseja, si no se deroga ó por lo menos se aclara, y podría venir muy pronto el caso de que produjera complicaciones algo más graves que las que hasta ahora hemos tenido que vencer; complicaciones que la Intendencia está en el deber de prevenir. No es sino muy fácil que en vista del decreto y de sus desechos, en alguna de las Repúblicas de América, que tantas pruebas de odio nos dan, y con el exclusivo objeto de perjudicar la dominación española en las Antillas, se oculte monedas con destino á Cuba, de un valor intrínseco menor aún del que el cambio que hoy tienen los billetes de Banco, ó introduciéndola en la Isla, logre circular por las escasas que hay en la circulación actual de moneda española, con el valor de la moneda española. ¿Qué disposiciones dictará la Intendencia para evitar este probable abuso? Esperemos. En otro artículo lo continuaremos examinando las demás disposiciones de la Intendencia, desde la fecha de aquel decreto hasta hoy, pues la materia se presta para escribir mucho, y un artículo no puede pasar de ciertos límites.—T.

Y sigue.

La Legalidad, insistiendo en que hemos dado una etimología ó derivación de la palabra *Legalidad*, que la cuestión de que lo es Sr. Poyatos, cuando solo he mos hablado de la composición de dicha palabra, manifestada desde las respetables autoridades, que citamos, y en las cuales colocamos en la Antilla, y quien en todo América, por supuesto, por lo de su valor intrínseco, y que tenga la misma ley que la moneda española.

Dejando aparte las inmensas dificultades que van á tropezar las oficinas, sobre todo con un personal nuevo, desconocedor hasta del sistema monetario de la Isla, y por lo tanto sin la menor experiencia para recaudar los derechos de la Hacienda en tan distintas especies, y los irreparables perjuicios que por ello indudablemente sufrirá el Tesoro, vamos á ver que se entiende por valor intrínseco de las monedas en el lenguaje común convencional.

El valor intrínseco es el del metal con el que se contenga la moneda, con más el costo de la acuñación hasta porción en condiciones de circular por el mercado con el valor representativo que se le concedió legalmente. ¿Cómo, pues, podrá averiguarse este por las oficinas? ¿Acaso es tan fácil adquirir estos conocimientos, como de un mal oficial conocer un jefe de Administración, y ponerlo al frente de un departamento, aunque de él no entienda ni siquiera el mecanismo? Preciso será, pues, que, antes de darse el debido cumplimiento al decreto, la autoridad de Hacienda determine el valor por el cual se han de recibir las monedas americanas en las cajas del Tesoro; y será sumamente fácil, después de todo, que así como en la Península la moneda de cinco francos de plata era admitida por diez y nueve reales vellón, cuando en valor real era de solos diez y ocho y catorce maravedises, la moneda de oro de muchas repúblicas de América tenga que admitirse por un valor intrínseco deficiente, y que en virtud de ello con el tiempo hayamos de sufrir los perjuicios consiguientes. Además, la moneda de oro de las diferentes Repúblicas de América, tendrá ó no la misma ley que la moneda española. Si la tiene como sucede con la mejicana, no hay dificultades; pero qué sucederá con la de Colombia, 20, 10 ó 60 milésimas? ¿Cómo averiguarán estas oficinas? ¿Dónde de ha sacado semejante principio? El Real Decreto de 15 de abril de 1848, se señaló como unidad monetaria en todos los dominios españoles, el real de vellón. En el año 1866 se señaló como tal el escudo; y aquí, y como opinión nuestra, diremos que es la disposición más racional, pues comprendida fácilmente todas las monedas anteriores. Y en 1869, por el Ministro D. Laureano Figuerola, desemos de unificar nuestra moneda

con la más corriente en el Mediodía de Europa, se dispuso que la unidad fuera la peseta, cuyo decreto se publicó

